



JUZGADO TERCERO DE DESCONGESTION CIVIL DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO EN RESTITUCION DE TIERRAS DE MOCOA

100

San Miguel de Agreda de Mocoa, veintiséis (26) de Octubre de dos mil diecisiete (2017).

ST-00048/17

I. OBJETO E IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO, RADICACIÓN Y PARTES QUE INTERVIENEN

Tipo De Proceso	DE RESTITUCION Y/O FORMALIZACION DE TIERRAS
Radicación	860013121001-2015-00662-00
Solicitante	Ramiro Gonzalo Ordoñez Ordoñez – C.C. No. 1.505.812 Carmen Velasco Martínez –C.C. No. 27.352.813
Ubicación del Predio	Vereda La Cofania, inspección de policía La Castellana, Municipio de Villagarzon, Putumayo.
Tipo del Predio	Rural
Asunto	Sentencia No. 000048

II. ANTECEDENTES

Habiéndose agotado las etapas propias del proceso de Solicitud Judicial de Restitución de Tierras, adelantado por la parte solicitante, a través de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas, pasa a proferirse sentencia dentro del presente asunto.

1. HECHOS RELEVANTES

1.1. Respecto de la individualización y caracterización del predio objeto de la solicitud de Restitución: De conformidad con la información que yace en la solicitud, se individualiza el predio objeto de restitución de la siguiente manera:

TIPO / NOMBRE DEL PREDIO	FOLIO DE MAT.INMOBILIARIA	CEDULA CATASTRAL	AREA PREDIO	NOMBRE DEL TITULAR EN CATASTRO	RELACION JURIDICA CON EL PREDIO
N/A	440-5949	86-885 00-02-0023-0013-000	524 M2	ISMAELINA DE MARTINEZ ORTIZ	OCUPANTE
DIRECCION Y/O UBICACIÓN DEL PREDIO: RURAL SIN DENOMINACION, VEREDA LA COFANIA, MUNICIPIO DE VILLAGARZON, PUTUMAYO.					
INFORMACION DEL SOLICITANTE: RAMIRO GONZALO ORDOÑEZ ORDOÑEZ C.C. No. 1.505.812 CARMEN VELASCO MARTINEZ C.C. No. 27.352.813					
NUCLEO FAMILIAR	NOMBRE	IDENTIFICACION	PARENTES O	PRESENTE AL MOMENTO DE LA VICTIMIZACION	
	CARMEN VELASCO MARTINEZ	27.352.813	COMPAÑERA	SI	
	NANCY ALEIDA ORDOÑEZ VELASCO	34.658.939	HIJA	SI	
COORDENADAS DEL PREDIO					
PUNTO	LATITUD	LONGITUD	NORTE	ESTE	
12130	0° 56' 7,368" N	76° 41' 28,098" W	595305,013905	708988,923202	
12131	0° 56' 7,298" N	76° 41' 27,352" W	595302,820396	709012,037503	
12133	0° 56' 8,113" N	76° 41' 28,013" W	595327,915997	708991,587198	
12132	0° 56' 8,043" N	76° 41' 27,293" W	595325,744365	709013,857385	
LINDEROS Y COLINDANCIAS					
Partiendo desde el punto 12133 en línea recta en dirección oriente, hasta llegar al punto					

NORTE	12132 en una distancia de 22,37 mts con predios del señor Jorge Ortiz.
ORIENTE	Partiendo desde el punto 12132 en línea recta en dirección sur, en una distancia de 22,99 mts, hasta llegar al punto 12131, con predios del señor Duvan Morales.
SUR	Partiendo desde el punto 12131 en línea recta en dirección occidente, en una distancia de 23,21 mts., hasta llegar al punto 12130 con predios de Ramiro Gonzalo Ordoñez.
OCCIDENTE	Partiendo desde el punto 12130 en línea recta en dirección Norte, en una distancia de 23,05 mts, cerrando hasta el punto 12133, con predios de Vía Pública.

109

1.2. Respecto de la adquisición del predio objeto de la solicitud: El señor Ramiro Gonzalo Ordoñez Ordoñez Prado y su cónyuge, adquieren el predio rural ubicado en la Vereda la Cofania, Jurisdicción del municipio de Villagarzon, departamento del Putumayo, por medio de compraventa desde el año 1968 aproximadamente al señor Héctor Clavijo Álvarez, mismo que nunca fue formalizado ante las entidades respectivas.

1.3. Respecto de los hechos motivos del desplazamiento forzado: En relación con desplazamiento y abandono del predio, el señor Ramiro Gonzalo Ordoñez Ordoñez, manifiesta que se vio obligado a salir desplazado con su núcleo familiar, debido a que integrantes de la guerrilla de las FARC, en una oportunidad detuvo el bus en el que iba su hija, el cual se dirigía a la escuela en Puerto Umbría, Putumayo, hizo bajar a todos los menores, para ellos usar el bus y trasladar su remesa, acto seguido enviaron al conductor a recoger a los menores y llevarlos hasta es plantel educativo, ese mismo día a algunos de los niños identificados con nombre propio los apartaron y se los llevaron, posteriormente este grupo armado al margen de la Ley invadió propiedad privada intentando llevarse a la hija del señor Ordoñez, razón por la cual la señora Carmen Velasco Martínez madre de la menor al momento de los hechos, hablo con estos individuos suplicando que no se los llevaran, petición a la que accedieron con la amenaza de que el grupo familiar abandone la vereda en el término de tres días, debiéndose trasladar a Mocoa donde el padrino de la niña quien era profesor y fue el que ayudo a sacarlas hasta Timbio-Cauca, lugar en el que se encontraba el solicitante visitando a su padre quien yacía enfermo. Posteriormente la señora Carmen Velasco se quedó con la menor viviendo en este lugar para qué termine sus estudios, mientras que el señor Ordoñez se regresos a sus tierras en este departamento trabándolas un año más aproximadamente.

El reclamante se encuentra incluido en el registro único de victimas con fecha de valoración del 05 de febrero 2005.

El día 21 de octubre de 2014 el señor Ramiro Gonzalo Ordoñez Ordoñez presentó ante la UAEGRTD solicitud de inscripción en el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente del predio que nos ocupa, y una vez aceptada dicha petición la entidad profirió la resolución RP 0837 de 2015 mediante la cual se inscribió el predio objeto de restitución en el Registro Único de Tierras despojadas y abandonadas forzosamente a nombre del solicitante ya mencionado de forma individual, el predio, y demás especificaciones señaladas en la Ley 1448 de 2011 y decretos reglamentarios.

III. PRETENSIONES

A través de la solicitud que hiciera el señor Ramiro Gonzalo Ordoñez Ordoñez, ante la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras despojadas a través de apoderado judicial designado por la Unidad Administrativa Especial de Restitución de Tierras, busca obtener como pretensiones principales las siguientes:

- 190
1. Se solicita que se proteja el derecho fundamental a la Formalización y/o Restitución de Tierras de los solicitantes, en su calidad de víctimas y ocupantes, así mismo, se den las órdenes enunciadas en el artículos 72, 91 y 121 de la Ley 1448 de 2011, ello en cumplimiento del deber de garantizar la prevalencia de los derechos de aquel y del derecho de retorno o reubicación voluntaria en condiciones de sostenibilidad, seguridad y dignidad.
 2. Que se declaren todas las medidas de reparación, cautelares y satisfacción integral a favor de las víctimas del conflicto armado interno contenidas en el título IV de la ley 1448 de 2011, considerándose entre ellas el alivio de pasivos por concepto de impuestos prediales, tasas y otras contribuciones, al igual que las deudas por concepto de servicios públicos domiciliarios, por concepto de pasivos financieros de carteras con entidades vigiladas por la Superfinanciera de Colombia, constituir el predio en patrimonio de familia, tener acceso a los servicios públicos y las demás generadas de la restitución jurídica del predio solicitado con el objeto de procurar el goce efectivo de los derechos del solicitante.
 3. Todo ello en el marco de la correspondiente gratuidad y prevalencia de derechos en favor de quien solicita la protección y restitución de sus derechos civiles.
 4. De conformidad con el artículo 117, se solicita se concedan pretensiones encaminadas a la estabilización socioeconómica de la señora Aracey Mueses Prado y su cónyuge, desde la perspectiva de un enfoque diferencial por ser mujer rural.

IV. ACTUACION PROCESAL:

Una vez verificadas las correspondientes actuaciones administrativas, en especial aquella de que trata el inciso 5 del art. 76 de la Ley 1448 de 2011, y de que se cumplieran los demás requisitos de procedibilidad se procedió como a continuación se resume:

La solicitud objeto de estudio fue radicada el 15 de diciembre de 2015 y admitida mediante Auto Interlocutorio No. 00043 de 26 de enero de 2016¹, y publicada en un diario de amplia circulación nacional el 09 de febrero de 2016², así mismo mediante oficios respectivos se notificó³ a las demás autoridades y entidades que participan dentro del proceso.

Vencido los términos de traslado al INCODER⁴ y de traslado de que trata los artículo 87 y 88 de la Ley 1448⁵ en actuación posterior a la apertura de pruebas, mediante auto Interlocutorio No. 00238 de 14 de marzo de 2016, debidamente notificada⁶ y una vez practicadas las mismas se tiene que las diferentes entidades allegan lo pertinente, salvo algunas de ellas manifestando que la solicitante no reporta información tributaria y se corre traslado al Ministerio Publico.

Estando en etapa de pruebas el Incoder allega por fuera de termino escrito de respuesta con sus respectivos anexos, visible a folios 113 a 122 del expediente, mediante el cual manifiesta que se remite a lo que se pueda probar dentro del proceso sobre las condiciones particulares de los solicitantes luego de ser valorada, confrontada y objetivizada frente a lo aportado, por lo que se remiten al criterio del Juez en el caso particular, contestación que fue objeto de evaluación por parte del despacho, acto seguido el Juzgado de origen califica de forma extemporánea en donde se concluye que no procede el estudio por extemporánea y por último se reconoce personería al apoderado de dicha entidad.

¹ Folios 97 y 98.

² Folio 102.

³ Folio 100

⁴ Folio 109

⁵ Folio 110

⁶ Folio 141

A folio 140 del expediente se observa Acta de Audiencia Oral N°. 0008 de 13 de abril de 2016, mediante la cual se le recepciona declaración al solicitante y se explica por parte del representante legal del mismo la imposibilidad de ubicar a los señores Duvan Morales y Jorge Ortiz, declaraciones solicitadas por el Ministerio Publico, visible a folios 106 a 107, diálogo mediante la cual se aclaran dudas en el escrito de la solicitud y se evidencia por parte del solicitante su intención de que le restituyan o compensen en su actual lugar de residencia en la ciudad de Popayán- Cauca, pues desde la ocurrencia de los hechos se vio obligado a desplazarse junto con su núcleo familiar hasta ese territorio por tener familia que le ofrecieron ayuda y hasta la fecha se encuentran establecidos.

En esta etapa procesal el INCODER allega escrito visible a folios 142 a 143, mediante el cual informan de la supresión del INCODER y se ordena su liquidación y de la creación de la Agencia Nacional de Tierras.

Finalmente a folio 154 del expediente el IGAC descubre el traslado por fuera de termino, manifestando que el predio objeto de solicitud efectivamente se encuentra contenido en dentro de un predio de mayor extensión con inscripción catastral bajo el código No. 86-885-00-02-0023-0012-000 que no coincide con la información proporcionada en el Informe Técnico Predial realizado por la U.R.T.

Luego de las anteriores manifestaciones se entienden por concluidas las actuaciones con la intervención del Ministerio Público, allegando el respectivo concepto⁷.

V. CONSIDERACIONES:

5.1. Presupuestos Adjetivos:

Este Juzgado es competente de conformidad con lo que viene establecido en los artículos 79 y 80 de la Ley 1448 de 2011, la parte solicitante se encuentra legitimada y debidamente representada⁸ así como se encuentra presentada la demanda en legal forma de conformidad con lo que viene normado por el los artículo 71 y ss y el artículo 84 de la Ley 1448 de 2011.

También encuentra acreditado dentro del proceso que se cumple el principio de procedibilidad de que trata el artículo 76 de la Ley 1448, toda vez que el señor Ramiro Gonzalo Ordoñez Ordoñez y Carmen Velasco Martínez, se encuentran incluidos en el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente, en calidad de víctima de abandono forzado, de forma individual, esto tal como se evidencia a folio 119 del expediente donde obra constancia NP 00106 del 11 de diciembre de 2015, que así lo confirma.

5.2. Problema Jurídico:

Tiene derecho el solicitante, señor Ramiro Gonzalo Ordoñez y su cónyuge, a ser reparados o compensados de manera integral, a obtener la tutela de su derecho fundamental a la restitución de tierras y a serle compensado o restituido y formalizado el predio rural sin denominación ubicado en la Vereda la Cofania, en el municipio de Villagarzón, Departamento del Putumayo, del cual es Ocupante?

Para responder y dar solución a la anterior formulación, se tendrán en cuenta las condiciones relacionadas con los hechos de violencia que afectaron la zona donde se encuentra ubicado el predio, la calidad de víctima del solicitante, su situación como ocupante del bien y las razones que dieron lugar al abandono del predio de la solicitante que se encuentren acreditadas dentro el trámite administrativo y judicial.

⁷ Folios 128 a 139.

⁸ Folios 94 a 95

5.3. Marco jurídico y conceptual:

192

La Restitución de Tierras despojadas o abandonadas en Colombia, viene como Instrumento resultante de un proceso evolutivo de los fenómenos sociales que de manera generalizada afectan sectores más vulnerables, fundamentado en normas constitucionales e internacionales y nutrida con las tendencias normativas y herramientas de protección, que han venido aterrizándose sobre la temática referente a la reparación y protección de las víctimas del conflicto armado, a través de un proceso histórico de adaptación e implementación de las herramientas legales, administrativas y judiciales puestas a disposición de la población afectada, víctima del conflicto armado en Colombia, observando estrictamente criterios de justicia y equidad bajo la óptica del enfoque diferencial a fin de proteger real y efectivamente a los sectores más vulnerables.

Múltiples y reiterados han sido los pronunciamientos de nuestro máximo órgano constitucional, que han decantado las teorías referentes a individualización, conceptualización, fundamentación legitimación y resolución de los conflictos que afectan directamente a las víctimas del conflicto armado colombiano, el despacho acoge los criterios que claramente decanta la sentencia reciente T-315 de 2016 que recorre no sólo los aspectos adjetivos y de implementación más destacados si no que ahonda en resaltar su esencia, finalidad y la importancia del rol del juez de Restitución en la Búsqueda de una paz estable y duradera:

(...) 4.1. *El diseño del proceso de restitución de tierras contemplado por la Ley 1448 de 2011 constituye en gran medida un reconocimiento a las formas propias que, en el contexto de la violencia rural, adoptó el abandono forzado de aquellas,⁹ así como la multiplicidad de dinámicas de usurpación y de despojo tanto material como jurídico que han tenido lugar en la compleja realidad histórica del conflicto armado interno colombiano. En relación con ello, vale la pena reproducir un conjunto de reflexiones vertidas en el Informe de Ponencia para Primer Debate del Proyecto que posteriormente se convirtió en la denominada Ley de Víctimas:*

"[...] Cerca de 750.000 hogares campesinos fueron desplazados de sus territorios por la fuerza en las últimas dos décadas, de los cuales 460.000 abandonaron un poco más de tres millones de hectáreas. De las tierras abandonadas, una parte permanece así, otra está cuidada por parientes o vecinos, o ha sido repoblada con campesinos a quienes los jefes armados adjudicaron tierras despojadas y otra parte fue transferida de hecho o de derecho a terceros, generalmente personas sin conexión aparente con los victimarios.

El despojo asumió varias modalidades, desde las compras forzadas a menor valor hasta el destierro, la usurpación física de la posesión y la destrucción de las viviendas y cercas que delimitaban los predios. El despojo de tierras fue legalizado, muchas veces, con transferencias forzadas, con la participación de notarios y registradores, y el rastro de los despojadores fue borrado por testaferros y múltiples traspasos a terceros de aparente buena fe.

Otras veces el despojo afectó derechos de tenencia y posesión, interrumpiendo el término de prescripción, y terceros obtuvieron títulos de adjudicación o titularon por vía judicial a su favor. En ocasiones el INCORA o el INCODER declararon caducados los títulos de beneficiarios de reforma agraria cuando se desplazaron y readjudicaron las parcelas a otras personas. Otras veces el IGAC englobó los predios despojados en otro mayor, alterando el catastro para desaparecer la cédula catastral de los despojados.

(...) 4.2. *En efecto, aquellas situaciones llevaron a repensar las estructuras procesales típicamente civiles, en procura de crear medidas excepcionales para ofrecer respuestas reales a las víctimas del conflicto en el marco de un proceso transicional de tierras, en el cual la restitución actuase como un componente preferencial y esencial del derecho a la reparación integral.*

⁹ En la sentencia C-715 de 2012, la Corte, entre otros asuntos debió definir si el Legislador incurrió en una omisión legislativa relativa al prever un conjunto de medidas para el despojo y no para el abandono forzado de predios, según la lectura que los demandantes hacían del artículo 74 de la Ley de víctimas y restitución de tierras, y de otras normas que giraban en torno al concepto de 'despojo de tierras'. La Corte consideró que, con independencia de las relevantes discusiones teóricas y sociales acerca de las tipologías de estos fenómenos, las medidas legislativas dictadas en respuesta al despojo son también aplicables al abandono de tierras: "Para la Corte, si bien los conceptos de abandono y despojo son fenómenos distintos, es claro que ambos producen la expulsión de la tierra de las víctimas, lo que genera una vulneración masiva de los derechos fundamentales de las víctimas del conflicto interno, razón por la cual esta Corporación en múltiples y reiteradas ocasiones ha reconocido normativa y jurisprudencialmente a las víctimas de despojo y abandono sin ninguna distinción, como sucede con la definición del delito de desplazamiento forzado. En este orden, la Ley 1448 de 2011 y especialmente los artículos que ahora se demandan –arts. 28 y 72– dejan ver el carácter asimilable de las víctimas de despojo, de usurpación y de abandono forzado de tierras, de tal manera que ambas son incluidas y tenidas en cuenta por el Legislador en el marco de la Ley 1448 de 2011".

4.2.1. Precisamente por las especificidades de la tipología del despojo, el abandono y la usurpación, una adecuada comprensión de la restitución y, en particular de la restitución de tierras exigió del legislador la construcción de un conjunto de medidas administrativas y judiciales de carácter extraordinario que hoy constituyen la denominada acción de restitución, cuyo propósito es el “restablecimiento de la situación anterior a las violaciones [sufridas como consecuencia del conflicto armado interno]” y subsidiariamente, cuando ello no fuere posible, la compensación.

4.3. En efecto, el proceso de restitución de tierras, tal y como está contemplado por la Ley 1448 de 2011, se compone de una etapa inicial o administrativa, a cargo de la Unidad de Restitución de Tierras y otra fase secundaria o judicial, en cabeza de los jueces y magistrados especializados en restitución de tierras.

(...) 4.3.3. Aunque el proceso de restitución es de única instancia y ello se ha considerado como constitucionalmente válido,¹⁰ a diferencia de lo que ocurre con la mayoría de procesos judiciales, donde la litis concluye con la ejecutoria de la última decisión adoptada, en el proceso citado, el legislador previó una competencia ius fundamental extendida. En otras palabras, “el Juez o Magistrado [mantiene la] competencia para garantizar el goce efectivo de los derechos del reivindicado en el proceso, prosiguiéndose dentro del mismo expediente las medidas de ejecución de la sentencia”. En ese sentido, el proceso sólo acaba cuando efectivamente se hubiesen cumplido todas las órdenes de protección y restitución contenidas en el fallo.

4.3.4. Con todo y lo anterior, la competencia del juez de restitución puede ir más allá. En efecto, el artículo 102 de la Ley 1448 de 2011, permite al funcionario judicial conservar su competencia después de la sentencia “(...) para dictar todas aquellas medidas que, según fuere el caso, garanticen el uso, goce y disposición de los bienes por parte de los despojados a quienes les hayan sido restituidos o formalizados predios, y la seguridad para sus vidas, su integridad personal, y la de sus familias.” Lo anterior implica que aun cuando en la sentencia no se haya dado una orden precisa, el juez pueda emitir nuevas y posteriores órdenes con el propósito de proteger los derechos fundamentales de los reclamantes, particularmente, los vinculados a la restitución, posibilidad que está en consonancia con los principios de estabilización y seguridad jurídica contemplados por el artículo 73 de la misma Ley.

4.3.5. En síntesis, dichas facultades ulteriores al fallo de restitución no son sólo entonces poderes judiciales de ejecución; también consisten en la posibilidad que tiene el juez de crear nuevos remedios jurídicos para asegurar que el proceso de restitución de tierras cumpla sus propósitos constitucionales y en el marco de la “(...) justicia transicional [sea] un [verdadero] elemento impulsor de la paz”, tal como lo ha sostenido esta Corporación. Concedido esto, se trata entonces de dos competencias ius fundamentales extendidas distintas del juez de restitución de tierras, de un lado, se tiene la **competencia para ejecutar** las órdenes dadas en la sentencia y, de otro, la **competencia para emitir nuevas órdenes** en procura de garantizar la estabilización y seguridad jurídica de la restitución.

(...) 4.4.1. En efecto, los altos valores jurídicos que se defienden en el proceso de restitución, se proyectan directamente sobre la labor de los jueces de tierras y sus amplísimas facultades dentro del mismo como un trámite integral, que no sólo pretende definir la relación jurídica existente entre el reclamante y su predio sino que además, está tras la búsqueda proporcional de alivios materiales a las violaciones de derechos fundamentales particularmente intensas que ocurren como consecuencia del desarraigo y la indignidad ocurrida por efecto del desplazamiento forzado. Por tal motivo, no resulta extraño que el artículo 25 de la Ley 1448 de 2011 fije el derecho a la reparación integral de manera diferenciada, transformadora y efectiva; y bajo dimensiones individuales, colectivas, materiales, morales y simbólicas.

4.4.1.1. Justamente, en relación con dichas dimensiones, cabe indicar que en el proceso de restitución, además del restablecimiento de las condiciones jurídicas y materiales del reclamante, resultan comprometidos una amplia gama de intereses que, si bien no tienen un origen estricto en la comprensión individual de la situación del peticionario, sí se constituyen en circunstancias y agentes externos que tienen la potencia suficiente de impedir el retorno efectivo de la población desplazada y, en ese sentido, de reproducir la conflictividad social.

4.4.2. Es por tal motivo, que los jueces de restitución no son en estricto sentido sólo jueces de tierras. En el marco de una visión teleológica e integral del proceso, tienen la responsabilidad de ajustar sus actuaciones al “(...) objetivo primordial de conseguir la reconciliación y la paz duradera y estable” que, con independencia del esclarecimiento de la titularidad jurídica del predio restituido, debe involucrar también aquellas intervenciones que siendo visibles en el proceso pueden comprometer otras vulneraciones distintas de derechos fundamentales a las alegadas por las víctimas solicitantes y que, de no gestionarse adecuadamente, imposibilitarían el cumplimiento de los propósitos transicionales de restitución.

Es así como se trabaja día a día en nuestro país en esa búsqueda de verdad, justicia y reparación con la utilización de cada vez novedosos y mejores instrumentos judiciales para poder resarcir de manera más justa, eficaz y completa las afectaciones derivadas de un contexto de violencia que ha

¹⁰ En sentencia C-099 de 2013, se consideró razonable esta previsión normativa al ponderar la limitación que entraña la ausencia de una instancia de revisión, con la finalidad constitucionalmente válida perseguida por la norma. Adicionalmente, explicó que el derecho de contradicción, en particular, y el debido proceso en general se encuentran garantizados por la estructura misma del procedimiento de restitución.

golpeado las bases más sensibles y vulnerables de nuestra sociedad, el campesinado, la infancia, mujeres y madres trabajadoras, cabezas de hogar, etc., golpes que si bien han dejado huella de dolor destierro, discriminación y olvido y que esta misma no se borra, por cuanto además debe ser recordada como símbolo de perdón y fortalecimiento tampoco debe ser estigma que impida la resocialización la convivencia, la reintegración a las labores de los campesinos en sus tierras, la paz.

Enfoque Diferencial aplicado a La Política de Restitución De Tierras

La situación de crímenes atroces, de lesa humanidad y de desplazamiento forzado o abandono de tierras que se ha evidenciado a lo largo de la historia de Colombia, presenta un común denominador que no es otro diferente a aquel que se circunscribe a la existencia de un factor discriminatorio, asociado al género, la edad, o la pertenencia a un grupo minoritario¹¹, por tal razón, debe ser un aspecto de relevante consideración en la etapa administrativa y posteriormente en la judicial de los procesos de Restitución de Tierras despojadas o Abandonadas Forzosamente, pues merecen un especial tratamiento que se ha decantado como lo han hecho los entes constitucionales y los instrumentos internacionales de protección en el marco legal estableciendo en el artículo 13 de la Ley 1448 de 2011, lo cual se traduce en la obligación legal no solamente en la atención a la víctima, sino que además, en lo que concierne a la intervención oficial para asegurar que éste grupo de personas medien de manera directa en la sustanciación de los casos, en el litigio de los mismos, en las decisiones judiciales y en la etapa posterior a ellas.

Es así como en desarrollo de ésta política de justicia transicional se expidió el Decreto 4829 de 2011 para incluir los componentes viabilizadores de la real ejecución del principio de discriminación positiva dentro del marco de la actuación administrativa del proceso de restitución de tierras, mismo que debe ser observado en la fase judicial como en las posteriores actuaciones de garantía del goce estable de los derechos reconocidos en la conclusión del trámite integral (Fase administrativa y judicial), en todo caso, procurados desde una óptica adecuada, diferenciada, transformadora y efectiva.

El hecho de procurar la mejor atención a las víctimas que se enmarquen dentro una situación especial y diferenciada del resto social, busca materializar la mayor atención a la población desplazada que actualmente se sujeta a un estado de mayor vulnerabilidad, para efectos de dignificarlas en el reconocimiento de sus derechos, superando de esa manera, el estado de cosas inconstitucional advertido en la sentencia T 025 de 2004.

5.4. Lo Probado:

De conformidad con el acervo que obra en el expediente, encontramos, los siguientes hechos probados:

Hechos de violencia: De acuerdo con el estudio de Contextualización General del municipio de Villagarzón que nos aporta la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas en su solicitud de restitución, las conclusiones tomadas del punto tres de la misma, son el resultado de un análisis fáctico, temporal y espacial en los que encajan perfectamente los hechos descritos en el acápite correspondiente.

Básicamente se explica el hecho de surgimiento de grupos armados al margen de la Ley con la ausencia de la presencia estatal en las zonas afectadas, como las FARC que figuran desde el año 1984 en el medio Putumayo, lo que permitió su accionar de atentados contra la infraestructura petrolera y eléctrica, así como el reclutamiento de menores en las veredas San Miguel de la

¹¹ Afrodescendientes, comunidades indígenas, población Rom o Gitanos

castellana, La Cofania y Villa Rica, cultivos ilícitos, la instalación de explosivos en las zonas viales de comunicación con otros municipios y retenes ilegales en el casco urbano y zonas rurales, situación que transforma las dinámicas culturales, sociales, políticas y económicas de las personas.

Posteriormente, en Villagarzón también hace su incursión las Autodefensas Unidas de Colombia, quienes aprovecharon la posición geográfica del municipio como corredor de movilidad estratégico para el tráfico de drogas ilícitas y armas, habida su conexión a zonas importantes de otros municipios, lo que hizo un escenario propicio para confrontaciones armadas entre guerrilla y paramilitares en disputa por el manejo y control, que se caracterizó por frecuentes amenazas, asesinatos, masacres y desapariciones, entre otros, generando temor y desplazamientos masivos de la población.

Consecutivamente, con la desmovilización de los grupos de autodefensa en el año 2006, se transforman los actores armados en las llamadas Bacrim o neo paramilitares y se reposicionan las Farc en el territorio mediante grupos conocidos como los Rastrojos y los Urabeños quienes protagonizaron los hechos violentos consistentes en ataques a la población civil, a la Fuerza Pública e infraestructura petrolera de Villagarzón, la instalación de minas antipersona y artefactos explosivos, amenazas personalizadas, secuestro extorsivos y reclutamiento de menores, proliferaron además, grupos de delincuencia común etc.

Dado que estos hechos, como quedó anotado concuerdan en espacios de tiempo lugar y condiciones resulta probada en consecuencia, la veracidad de los hechos violentos que narra el señor Ramiro Gonzalo Ordoñez en su solicitud, así como también el hecho del desplazamiento forzado del predio del cual es propietaria desde el año 2004.

Condición de Víctima del señor Ramiro Gonzalo Ordoñez: Desarrollando el concepto de víctima que establece la Ley 1448 de 2011 en su artículo tercero y los criterios jurisprudenciales a tener en cuenta a fin de entrar a determinar quién puede ser considerado víctima del conflicto armado colombiano, encontramos que en sentencia T-054 de 2017 se reiteran las posiciones esbozadas por el máximo órgano constitucional al respecto:

5. La noción de víctima de violaciones de derechos humanos en el conflicto armado colombiano. Reiteración de jurisprudencia

En el ordenamiento interno colombiano, existe un importante marco normativo que ha sido reiteradamente reconocido por esta Corporación.¹² Desde el año 1993, con el artículo 1º del Decreto 444, se reconoció la calidad de víctima a aquellas personas que hubieran sufrido perjuicios indirectos como consecuencia de atentados terroristas cometidos con bombas o artefactos que afecten a la población civil. Posteriormente, se amplió el concepto incluyendo a la población afectada como consecuencia de tomas guerrilleras¹³, a las que sufrieran por combates y masacres indiscriminadas por motivos ideológicos o políticos¹⁴ y, con el artículo 15 de la Ley 418 de 1997, se incluyó a la población civil que sufriera perjuicios en su vida, integridad personal o bienes, como consecuencia de actos relacionados con el marco del conflicto armado interno, atentados terroristas, combates, ataques y masacres.

(...).

En tratándose de las normas internas que han sido expedidas por el Congreso de la República y el Gobierno Nacional, de manera prevalente debe mencionarse la Ley 1448 de 2011 y sus decretos con fuerza de ley creados para satisfacer los derechos de los grupos étnicos. La Ley 1448, comúnmente reconocida como “Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras”, busca restablecer el proyecto de vida de cada víctima del conflicto armado interno, así como garantizar el goce efectivo de sus derechos de manera sostenible y transformadora.

La Ley 1448 de 2011, se enmarcó dentro del campo de la justicia transicional y tiene como propósito definir acciones concretas para garantizar los derechos a la verdad, justicia, reparación y no repetición.

En relación con el concepto de víctima, el artículo 3º de dicha ley estableció lo siguiente:

¹² Corte Constitucional, Sentencia T-364 de 2015.

¹³ Artículo 18 de la Ley 104 de 1993.

¹⁴ Artículo 10 de la ley 241 de 1995.

***“aquellas personas que individual o colectivamente hayan sufrido un daño por hechos ocurridos a partir del 1° de enero de 1985, como consecuencia de infracciones al Derecho Internacional Humanitario o de violaciones graves y manifiestas a las normas internacionales de Derechos Humanos, ocurridas con ocasión del conflicto armado interno. También son víctimas el cónyuge, compañero o compañera permanente, parejas del mismo sexo y familiar en primer grado de consanguinidad, primero civil de la víctima directa, cuando a esta se le hubiere dado muerte o estuviere desaparecida. A falta de estas, lo serán los que se encuentren en el segundo grado de consanguinidad ascendente. De la misma forma, se consideran víctimas las personas que hayan sufrido un daño al intervenir para asistir a la víctima en peligro o para prevenir la victimización. La condición de víctima se adquiere con independencia de que se individualice, aprehenda, procese o condene al autor de la conducta punible y de la relación familiar que pueda existir entre el autor y la víctima”.* (negrillas del despacho)**

De conformidad con el citado artículo 3° de la Ley 1448 de 2011, el propio Estado no solo reconoció la existencia del conflicto armado interno en Colombia, sino también la configuración de violaciones a las normas del Derecho Internacional Humanitario (DIH); en especial, el artículo 3° común a los Convenios y Protocolos de Ginebra.

***Dentro de los aspectos tenidos en cuenta en el artículo 3° común a los Convenios y Protocolos de Ginebra, se encuentra el denominado principio de distinción, el cual genera a las partes el deber de diferenciar entre combatientes y no combatientes. Ninguna de las partes en conflicto puede involucrar a las personas que no tomen o hagan parte directamente de las hostilidades. Estas personas, por ese hecho, adquieren el estatus de personas protegidas.*(Negrillas del despacho)**

Así las cosas, cualquier afectación a los derechos de las personas protegidas en el marco del conflicto armado interno, es reconocida y está enmarcada en la Ley 1448 de 2011.

***A partir de las sentencias C-253A de 2012 y C-781 del mismo año, esta Corporación ha entendido que en cuanto a la expresión consagrada en el artículo 3° referente a la noción de víctima “con ocasión al conflicto armado”, dicho “conflicto armado” debe interpretarse de manera amplia, más allá de las confrontaciones estrictamente militares, o a un grupo específico de actores armados con exclusión de otros.* (Negrillas del Despacho)**

Esta Corte ha indicado que estos criterios interpretativos son obligatorios para los operadores jurídicos y “ante la ocurrencia de una afectación grave de derechos humanos o de una infracción de las normas del derecho humanitario, en caso de duda sobre si tal hecho ha ocurrido en el marco del conflicto armado interno, debe darse prevalencia a la interpretación en favor de la víctima”.

En el asunto que nos ocupa, la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas certificó que el señor Ramiro Gonzalo Ordoñez, junto con su núcleo familiar al momento de los hechos, se encuentran incluidos en el Registro Único de Víctimas¹⁵ –RUV- con fecha de valoración de 05/052/2005, acudiendo a la veracidad de la información proporcionada en el escrito de solicitud de la U.R.T, al informe de la U.A.R.I.V.¹⁶, igualmente se pudo corroborar en el informe de caracterización de la UAEGRTD- Territorial Putumayo de las manifestaciones contenidas en el cuestionario de ampliación del reclamante, lo cual permite concluir que la información brindada por el solicitante es fidedigna, y corresponde con los hechos relatados en la acción de restitución.

De los documentos arrimados con la solicitud por la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas -los cuales se consideran fidedignos- y del material recaudado por este Despacho en el transcurso de esta etapa judicial, y que ha sido objeto de análisis en esta sentencia, se tiene que el señor Ramiro Gonzalo Ordoñez, es víctima del conflicto armado interno del país, de conformidad a los límites temporales establecidos por la ley 1448 de 2011 -esto es entre el año 2003 y el término de vigencia de la ley-, calidad que viene plenamente probada en el proceso, según análisis previo hecho por este Despacho y de las pruebas recaudadas, se puede concluir que el solicitante, abandono de manera forzada el predio que ocupaba, donde vivía y donde ejercía su actividad comercial de siembra y ganado, la cual le servía de sustento de las necesidades básicas y como fuente de ingresos.

¹⁵ Folios 65 del cuaderno principal.

¹⁶ Folio y 42

197

Identificación y determinación del predio objeto de Solicitud: Respecto de los datos consignados en el acápite de los hechos de la demanda, se tienen como correctos y ciertos, ya que el bien objeto de restitución y/o formalización, reconocido catastralmente con No. 86-885-00-02-0023-0013-000 se encuentra debidamente identificado e individualizado, pues corresponde al descrito por el solicitante, y del cual no poseen el dominio por tratarse de un bien baldío y por tanto la propietaria es la Nación, según información que reposa en el Informe Técnico Predial¹⁷. De otra parte el análisis da cuenta que el predio objeto de solicitud de acuerdo al shapefile de la Agencia Nacional Minera, existe un bloque 22 correspondiente a áreas estratégicas mineras¹⁸, estado activa, con la aclaración que es un bloque de gran extensión y se enuncia en el I.T.P. únicamente para conocimiento, mas no como afectación directa del predio.

Sin embargo es de aclarar que existen diferencias entre las fuentes de información oficial catastral y registral, razón por la cual la Dirección territorial del Putumayo, estableció la necesidad de realizar proceso de Georreferenciación en campo, de lo que resulto que si se sobrepone comparado con el plano catastral, lográndose constatar por la U.R.T. que el predio objeto de solicitud se identifica con el numero predial catastral 86-885-00-02-0023-0013-000, el cual el cual se encuentra referido en el IGAC, pese a que no coinciden en coordenadas.

Relación Jurídica o calidad de Ocupante que ostenta el solicitante respecto al predio:

Tomado como presupuesto de la acción, y los requisitos que se debe cumplir para ser sujeto de adjudicación de baldíos por parte de la Agencia Nacional de Tierras, toda vez que dicha entidad hace referencia a la explotación económica de predios que son de la Nación, que no están excluidos por ley de una relación de propiedad, por un tiempo no determinado, con el ánimo de señor y dueño, con un área igual o inferior a la denominada, en donde se especifica su condición de terreno baldío, pues dicha información se corrobora con la respuesta emitida por la Unidad Operativa de Catastro de Mocoa (P)¹⁹ donde pone de presente que si existe otra propiedad en la vereda san Fidel, con un área de 0.06 Has, que en suma con el área solicitada, no supera el máximo permitido para este tipo de adjudicaciones, a nombre del solicitante en la ubicación descrita por la UAEGRTD- Territorial Putumayo, sin que exista matrícula inmobiliaria a su favor del predio SOLICITADO, pues el mismo pertenece a la NACIÓN.

Es importante mencionar que el solicitante adquirió el predio mediante compraventa informal al señor Hector Clavijo, de acuerdo al folio de matrícula No. 440-5949 correspondiente a mejoras.

En este punto del análisis se hace necesario referirse a la contestación por fuera de término de la demanda allegada a nombre del INCODER donde con escrito de 14-03-2016²⁰, se pronuncia sobre los hechos, pretensiones y trámite procesal, sin que presente oposición alguna por tratarse de un bien baldío, y tras citar la ley 1448 de 2011 y las diferentes normas que regulan la adjudicación de baldíos, aduce que tal situación debe ser valorada, confrontada y objetivizada frente a las pruebas aportadas y realizadas en el curso del proceso, remitiéndose al buen criterio y apreciación del Juez.

Finalmente es importante mencionar que en la ficha predial, documento anexo a la solicitud se puede constatar que se encuentra a nombre de la señora Ismaelina de Martinez Ortiz, el cónyuge de la solicitante si aparece registrado en la Historia censal catastral bajo la clave de título I, obrante a folio 103 del expediente.

5.5. Caso Concreto:

¹⁷ Folio 61 a 66, cuaderno principal.

¹⁸ Vigente desde el 24 de febrero de 2012-Resolucion MME No. 18 0241 de 24 de febrero de 2012-Incorporado 28-02-2012.

¹⁹ Folio 49 a 50, cuaderno principal.

²⁰ Folios 113 a 122 cuaderno principal.

Decantado lo anterior pasamos a analizar si de todo lo probado, se concluye finalmente el reconocimiento de los derechos invocados con la solicitud, teniendo en cuenta que la pretensión principal de restitución lleva inmersa la declaratoria de pertenencia del mismo, habida cuenta la calidad de Ocupante que ostenta la solicitante respecto del predio objeto de la solicitud de Restitución.

Comenzaremos tomando en cuenta el análisis reciente y reiterativo realizado por nuestro máximo órgano constitucional que lo resume así²¹:

BIENES BALDIOS-Evolución del régimen legal

En algunos periodos el régimen jurídico de los baldíos se ha aproximado más al modelo del dominio eminente y de la res nullius. Sin embargo, al margen de los cambios en los objetivos políticos buscados con el régimen de baldíos en cada momento histórico, desde la conquista el régimen jurídico ha preservado ininterrumpidamente la propiedad estatal sobre estos bienes, a los que hoy clasifica como bienes fiscales adjudicables. Por otra parte, se puede concluir que a partir de la Ley 200 de 1936, y aún más claramente con la Ley 135 de 1961, se ha ido configurando la autonomía del derecho agrario frente a las normas generales del derecho civil. Dentro de esta autonomía cobra especial importancia el papel cada vez mayor que se le otorga al Estado para dirigir la reforma agraria, y en especial, el valor jurídico que se le da a los títulos de adjudicación de baldíos. Ante el silencio legal, la jurisprudencia, manteniendo una visión más tradicionalista, afirmó que los actos administrativos inicialmente no eran títulos, sino simples "actos declarativos de propiedad", mientras que con posterioridad a la Ley 135 de 1961 fueron expresamente considerados como títulos declarativos de la propiedad adquirida mediante la ocupación, y ya con la Ley 160 de 1994, los llamados títulos "traslaticios del dominio", por medio de los cuales el Estado transfiere la propiedad.

BIENES BALDIOS-Naturaleza y finalidad

La jurisprudencia de esta Corporación, siguiendo la doctrina y la jurisprudencia pacífica, ha clasificado los bienes baldíos como un tipo especial de bienes, los bienes fiscales adjudicables. Son bienes fiscales adjudicables aquellos bienes públicos que no están a disposición de la población en general. Es decir, no son de uso público sino bienes fiscales, lo cual significa que no cualquier persona tiene derecho a usarlos, sino que tienen vocación de uso exclusivo por parte de entidades del Estado, para la prestación de servicios públicos, o para ser adjudicados.

ADJUDICACION DE BIENES BALDIOS-Potenciales beneficiarios

Sólo pueden acceder a los baldíos las personas que no sean propietarias de otros bienes rurales, y cuyo patrimonio se encuentre por debajo de determinado tope máximo. Así mismo, es posible que el Gobierno les dé prioridad en el acceso a los baldíos a ciertos sectores especialmente vulnerables de la sociedad, a través de programas específicos. Es así como el Gobierno ha diseñado programas dirigidos especialmente a las víctimas del conflicto armado, o de desastres naturales, y a las mujeres cabeza de hogar, según la facultad establecida en la misma Ley 160 de 1994.

Por encontrarnos frente a una solicitud de restitución y/o formalización de terrenos baldíos, producto de un despojo y/o desplazamiento forzado, deberemos enmarcarnos en la Ley civil Vigente, esto es Ley 160 de 1994 con la finalidad de poder establecer el cumplimiento de los requisitos o condiciones sine qua non aterrizados al caso concreto.

Es sabido que, de conformidad con la normatividad vigente la manera de adquirir Terrenos o predios baldíos adjudicables es mediante la obtención de título traslativo de dominio otorgado por el ente estatal a través del Instituto Colombiano de Reforma Agraria, hoy Agencia Nacional de Tierras ANT, debe mediar ocupación previa del predio, en tierras de aptitud agropecuaria que se estén explotando en favor de las personas naturales, empresas comunitarias y cooperativas campesinas en las extensiones y condiciones que para cada municipio o región del país señale la junta directiva²².

Quien pretenda la adjudicación de un baldío, deberá demostrar que tiene bajo explotación económica las dos terceras partes de la superficie cuya adjudicación solicita y que la explotación adelantada corresponde a la aptitud del suelo, así mismo deberá acreditarse una ocupación y explotación previa no inferior a cinco (5) años para tener derecho a la adjudicación. La ocupación anterior de persona distinta del peticionario.

²¹ Corte Constitucional, Sentencia SU/235/16 .
²² Artículo 65 Ley 160 de 1994

No se podrán efectuar titulaciones de terrenos baldíos en favor de personas naturales o jurídicas que sean propietarias o poseedoras, a cualquier título, de otros predios rurales en el territorio nacional. Así mismo, en el artículo 74 de la Ley 1448 de 2011 se preceptuó que si el despojo o el desplazamiento perturbó la explotación económica del baldío, no se tendrá en cuenta la duración de dicha explotación, además, se advierte que debe acogerse como criterio el que La Unidad Agrícola Familiar sea la extensión máxima a titular, siendo ineficaz cualquier adjudicación que la exceda.

Sin embargo, según la Ley 160 de 1994 junto con su Decreto Reglamentario 2664 de 1994, se vislumbra que el solicitante y su núcleo familiar para el momento de los hechos, cumplen los requisitos exigidos por la norma, pues se trata de personas campesinas, de escasos recursos²³, que para la época de los hechos no eran propietarios de otras tierras, que se dedicaban a la actividad agrícola, pues gran parte de su terreno los trabajaban con cultivos de yuca, yota, chíro, pasto gramalote, entre otros, todo lo anterior sumado calidad de víctimas de desplazamiento forzado por la violencia, que también se encuentra probado, que se vivió en esa zona vereda de Villagarzon (P) y de la cual fueron objeto el solicitante y su núcleo familiar.

Además, el señor Ramiro Gonzalo Ordoñez habitaba y explotaba el referido predio con ánimo de señor y dueño antes del desplazamiento, según las declaraciones y testimonios aportados en la demanda²⁴, mismas que dan certeza al despacho de lo referido, en virtud a que justifican sus razones.

Teniendo en cuenta que se encuentra probado el desplazamiento forzado y consecuente abandono por varios años, acarrea en consecuencia concluir que sí se ha presentado una perturbación a la explotación del predio, y que de cara a lo preceptuado en el artículo 74 de la Ley 1448 de 2011, implica que este requisito del tiempo, no es exigible en el presente caso.

En cuanto a las restricciones de las áreas de interés nacional correspondiente a los parques naturales, páramos, resguardos indígenas y afro descendientes, zonas de explotación de hidrocarburos y áreas de interés minero-energético, según información aportada por la UAEGRTD, el predio materia del proceso, se encuentra el Bloque 22 correspondiente a áreas estratégicas mineras, si bien el bloque es de gran extensión la U.R.T. lo menciona en su escrito de demanda y en el I.T.P., únicamente para conocimiento mas no como afectación directa del predio.

En lo que atañe al área del predio que aquí se pretende restituir y/o formalizar, no excede el área establecida por el gobierno nacional (70 a 90 hectáreas), si tenemos en cuenta que el predio tiene una extensión de quinientos veinticuatro metros cuadrados (524 M2)²⁵.

Frente al límite patrimonial que deben detentar las personas que solicitan la adjudicación de predios baldíos es menester decir, que ello se prueba a través de las declaraciones del impuesto sobre la renta que cada año gravable están obligados a presentar ciertas personas naturales y jurídicas, encontrando que la entidad competente en este caso la DIAN, sin embargo en el caso bajo estudio, se ofició a la entidad sin obtener respuesta alguna, que del análisis de las pruebas aportadas, se determina que el solicitante es una persona de bajos recursos ²⁶, lo cual nos permite analizar esta situación a partir del principio de buena fe²⁷ contemplado en el artículo 5 y de la

²³ Informe de Caracterización Grupo Familiar realizado por ICBF-Regional Putumayo (folios 217 a 221, cuaderno principal)

²⁴ Folios 42 a 46.

²⁵ Para el municipio de Valle de Guamuéz (P), la UAF es de 70 a 90 has, según Resolución No. 041 de 1996.

²⁶ Folio 129, cuaderno principal.

²⁷ **PRINCIPIO DE BUENA FE.** El Estado presumirá la buena fe de las víctimas de que trata la presente ley. La víctima podrá acreditar el daño sufrido, por cualquier medio legalmente aceptado. En consecuencia, bastará a la víctima probar de manera sumaria el daño sufrido ante la autoridad administrativa, para que esta proceda a relevarla de la carga de la prueba.

En los procesos en los que se resuelvan medidas de reparación administrativa, las autoridades deberán acudir a reglas de prueba que faciliten a las víctimas la demostración del daño sufrido y aplicarán siempre el principio de buena fe a favor de estas.

inversión de la carga de la prueba del artículo 78²⁸ de la ley 1448 de 2011, para deducir que debió ser el INCODER, ahora Agencia Nacional de Tierras quien debió desvirtuar que el solicitante ostentaba una capacidad económica superior al límite establecido por la norma, no obstante dicha entidad en ningún momento desvirtúa eso en la contestación de la demanda, de otro lado, en el requerimiento hecho con el decreto de pruebas, donde se le preguntaba específicamente de si los solicitantes cumplían o no con los presupuestos de la ley 160 de 1994 para la adjudicación del bien baldío, además de lo probado se llega sin mayores esfuerzos a la conclusión, tal como quedó dicho arriba, que el señor Ramiro Gonzalo Ordoñez es una persona de escasos recursos económicos.

Se advierte que en este pronunciamiento se declarará el derecho que tiene el Solicitante a que se le tenga en cuenta y priorice, dentro de los diversos componentes que estructuran el mismo²⁹ y frente a todas aquellas políticas implementadas por el Estado para garantizar los derechos que tienen las víctimas del conflicto armado interno, siempre y cuando, se dé el retorno y/o el inicio o continuación de explotación económica del predio.

El predio rural ubicado en departamento del Putumayo, municipio de Villagarzón, vereda La Cofania identificado con cedula predial No. 86-885-00-02-0023-0013-000, un territorio afectado por los hechos de violencia descritos y recopilados en el informe de contexto allegado al expediente, pues el solicitante, vivía y trabajaba en el bien inmueble objeto del proceso que nos ocupa; el predio abandonado fue incluido en el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas mediante acto administrativo RP 0837 de 2015 y que luego de un juicioso trabajo de campo, social, catastral y administrativo, se confirmó que el solicitante en calidad de OCUPANTE tiene todos los derechos según las políticas de la ley 1448 de 2011, es decir, derecho a que se les restituya y/o titule el goce efectivo y el uso de la tierras.

Sin embargo, el demandante en el formulario de solicitud de inscripción en el registro de tierras despojadas, así como en la ampliación de la declaración y el informe de caracterización familiar del ICBF – Regional Cauca, hace hincapié en la restitución con reubicación de su predio pues ni el ni su familia quieren regresar al lugar que les causo su desplazamiento y sufrimiento por la violencia; para ello pone de presente que ha rehicieron su vida consiguiendo empleos que les da para subsistir con carencias pero dignamente y rodeados de gran parte de su núcleo familiar, que han encontrado tranquilidad y han logrado acoplarse en su nuevo domicilio en Popayán (C), por lo que han manifestado no querer volver a esa zona, pues seguir en la ciudad les permitiría continuar sus nuevas vidas y la posibilidad para trabajar.

Así las cosas, partiendo de los argumentos aducidos por el solicitante y su familia junto con las pruebas allegadas, se puede concluir que existe un arraigo a su nuevo domicilio donde desarrollan su vida personal, laboral y familiar de manera positiva y tranquila, y teniendo en cuenta que el espíritu de la ley 1448 de 2011³⁰ es la de un Juzgador con vocación transformadora y reparadora³¹,

En los procesos judiciales de restitución de tierras, la carga de la prueba se regulará por lo dispuesto en el artículo 78 de la presente Ley.

²⁸ INVERSIÓN DE LA CARGA DE LA PRUEBA. Bastará con la prueba sumaria de la propiedad, posesión u ocupación y el reconocimiento como desplazado en el proceso judicial, o en su defecto, la prueba sumaria del despojo, para trasladar la carga de la prueba al demandado o a quienes se opongan a la pretensión de la víctima en el curso del proceso de restitución, salvo que estos también hayan sido reconocidos como desplazados o despojados del mismo predio.

²⁹ 1. Salud 2. Alimentación 3. Educación 4. Identificación 5. Reunificación familiar 6. Orientación ocupacional 7. Vivienda 8. Atención psicosocial 9. Tierras 10. Servicios públicos básicos 11. Vías y comunicaciones 12. Seguridad alimentaria 13. Ingresos y trabajos 14. Organización social.

³⁰ LEY 1448 DE 2011. ARTÍCULO 1°. OBJETO. La presente ley tiene por objeto establecer un conjunto de medidas judiciales, administrativas, sociales y económicas, individuales y colectivas, en beneficio de las víctimas de las violaciones contempladas en el artículo 3º de la presente ley, dentro de un marco de justicia transicional, que posibiliten hacer efectivo el goce de sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación con garantía de no repetición, de modo que se reconozca su condición de víctimas y se dignifique a través de la materialización de sus derechos constitucionales.

³¹ LEY 1448 DE 2011. ARTÍCULO 25. DERECHO A LA REPARACIÓN INTEGRAL. Las víctimas tienen derecho a ser reparadas de manera adecuada, diferenciada, transformadora y efectiva por el daño que han sufrido como consecuencia de las violaciones de que trata el artículo 3º de la presente Ley. La reparación comprende las medidas de restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y

flexibilizando los criterios de la justicia frente a las rigurosidades procesales y probatorias, que permita cambiar de una sociedad con un contexto de violencia a uno de paz, de forma incluyente, garantizando los derechos de las víctimas tanto en su integridad física como psíquica, esta judicatura procede a considerar la restitución por equivalencia bajo los postulados ya mencionados.

En ese orden de ideas, se puede observar que en este caso existe una negativa de la víctima y su familia por retornar al predio por afectación psicológica, a pesar que el objetivo principal de la acción de restitución de tierras es precisamente devolver las tierras al campesino, existen situaciones excepcionales³² que prevé la misma ley en sus artículos 72 y 97 donde permite la restitución por equivalencia con un inmueble de similares características al despojado en otra ubicación, como cuando el retorno implique un riesgo para la integridad personal de la solicitante; a su vez, de no ser posible la reubicación o restitución por equivalencia, procederá el pago de una compensación en dinero.

Aterrizando dichos postulados al caso bajo estudio, se observa que el solicitante y su familia han conseguido reconstruir de forma positiva su vida personal, familiar y laboral lejos del ambiente de violencia vivido por el conflicto armado interno, lo cual les dejó traumas psicológicos razón por la cual es su negativa al retorno, y mal haría la Judicatura ordenar un retorno que no será efectivo para el goce de los derechos de las víctimas y que sobre todo no estaría resarciendo el daño sufrido sino revictimizarlos, máxime cuando el solicitante ha insistido en la reubicación de su predio por afectación a la integridad personal de ella y su familia, y como lo pretendido por la ley de restitución de tierras es resarcir todo ese daño a las víctimas del conflicto armado interno, procurando repararlas en sus derechos íntegramente, se ordenará con cargo a los recursos de la UAEGRTD se entregue a la solicitante y su compañero, un bien inmueble de similares o mejores características donde puedan vivir dignamente.

Finalmente, respecto a la determinación de las franjas mínimas de retiro obligatorio para la carretera o áreas de exclusión de que trata la Ley 1228 de 2008 de la vía pública que colinda con el predio objeto de restitución, la H. Corte Constitucional³³ se ha pronunciado al respecto, y pone de presente el principio pro persona (pro homine), en tal sentido:

Al respecto, considera la suscrita que resultaría en menoscabo de los derechos que se encuentran probados y que le asisten al solicitante, la dilación en la espera de decisión definitiva dentro de la solicitud impetrada y objeto de la presente providencia, por cuanto es una carga que realmente no tiene el deber jurídico de soportar la parte solicitante en calidad de víctima de despojo forzado, teniendo probado su derecho a la restitución del predio solicitado, como sí lo es aquella carga que le impone la ley precitada, y que corresponde a las autoridades territoriales verificar y hacer cumplir al momento en el que se llegare a determinar que existe afectación que derive en la

garantías de no repetición, en sus dimensiones individual, colectiva, material, moral y simbólica. Cada una de estas medidas será implementada a favor de la víctima dependiendo de la vulneración en sus derechos y las características del hecho victimizante.

³² **LEY 1448 DE 2011. ARTÍCULO 97. COMPENSACIONES EN ESPECIE Y REUBICACIÓN.** Como pretensión subsidiaria, el solicitante podrá pedir al Juez o Magistrado que como compensación y con cargo a los recursos del Fondo de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Tierras Despojadas, le entregue un bien inmueble de similares características al despojado, en aquellos casos en que la restitución material del bien sea imposible por alguna de las siguientes razones: a. Por tratarse de un inmueble ubicado en una zona de alto riesgo o amenaza de inundación, derrumbe, u otro desastre natural, conforme lo establecido por las autoridades estatales en la materia; b. Por tratarse de un inmueble sobre el cual se presentaron despojos sucesivos, y este hubiese sido restituido a otra víctima despojada de ese mismo bien; c. Cuando dentro del proceso repose prueba que acredite que la restitución jurídica y/o material del bien implicaría un riesgo para la vida o la integridad personal del despojado o restituido, o de su familia; d. Cuando se trate de un bien inmueble que haya sido destruido parcial o totalmente y sea imposible su reconstrucción en condiciones similares a las que tenía antes del despojo.

³³ Corte Constitucional, Sentencia SU – 636 - 15.

202
reserva de franjas de terreno que correspondan, hecho que tampoco impide el acceso a la restitución total del predio, así como tampoco al goce, disfrute y/o explotación del mismo.

5.6. Conclusiones:

Para enmarcar mejor la justificación y sentido de las decisiones que a continuación se condensan considera menester el despacho citar y acoger los nuevos y más recientes raseros esbozados por Nuestra Corte Constitucional en la ya mencionada sentencia T-054 de 2017:

*Esta Corporación ha consagrado que el derecho a la reparación integral es un derecho fundamental de las víctimas del conflicto armado, porque: "1) busca restablecer la dignidad de las víctimas a quienes se les han vulnerado sus derechos constitucionales; y 2) por tratarse de un derecho complejo que se interrelaciona con la verdad y la justicia, que se traduce en pretensiones concretas de restitución, indemnización, rehabilitación, medidas de satisfacción y no repetición"*³⁴.

*(...) El derecho a la reparación integral, a su vez, implica la obligación del Estado de adoptar "todas las medidas necesarias tendientes a hacer desaparecer los efectos de las violaciones cometidas, y a devolver a la víctima al estado en que se encontraba antes de la violación"*³⁵. (negritas del despacho)

(...) La Ley 1448 de 2011 se expidió para ser una ley de reparación integral. Es decir, más allá de que los victimarios hayan sido agentes estatales o miembros de grupos armados al margen de la ley, el Estado asumió el deber de reparar por la vía administrativa; es decir, de manera más expedita y eliminando la carga de la prueba en cabeza de las víctimas.

*De trascendental importancia para el contexto colombiano, es la consagración del principio denominado "enfoque transformador" en el marco del Decreto 4800 de 2011 (Art. 5º). Este busca eliminar los esquemas de discriminación y marginación de las víctimas del conflicto armado, evitando la repetición de los hechos. Es decir, en Colombia no solo se pretende reparar a las víctimas de manera integral con las cinco medidas ya mencionadas, sino también evitar que aquellas vuelvan a su situación previa de precariedad material y de discriminación"*³⁶. *El enfoque transformador busca, precisamente, transformar esas circunstancias, pues la exclusión es un factor generador del conflicto armado.* (negritas del despacho)

Frente a las pretensiones principales enunciadas en los numerales del primero al 13 se declararán, exceptuando el numeral 10, como quiera que es un acto procesal que se efectuó durante el transcurso del proceso o no aplica en el caso que nos ocupa por no darse los supuestos que la fundan, advirtiendo que en el caso que varíen o persistan las condiciones, podría modificarse esta decisión, las complementarias se conceden en atención a lo arriba expuesto.

No obstante ello, se reserva el despacho la facultad de modular la presente decisión si en condiciones futuras se llegare a determinar que resulta necesario con el fin de garantizar el resarcimiento perseguido con el cumplimiento de las órdenes dictadas.

En relación a las órdenes que aquí se impartan debe tenerse en cuenta que el solicitante se desplazó junto con su núcleo familiar, personas de extracción campesina, favorecida en la presente sentencia a su Solicitud de Restitución De Tierras Despojadas o Abandonadas Forzosamente, lo que implica que se le debe aplicar por el Estado el principio de *Enfoque Diferencial* para la interpretación de normas y aplicación de políticas de estado, teniendo en cuenta que es un sujeto de especial protección reforzada.

Finalmente se verificarán, de conformidad con lo ordenado por la Ley 1448 de 2011 en su artículo 91, literal p, los planes existentes de retorno y /o reubicación de la población desplazada, ya que de conformidad con lo informado por la Gobernación del Putumayo en memorial visible a folios 152

³⁴ Corte Constitucional, Sentencia C-753 de 2013.

³⁵ Corte Constitucional, Sentencia C-454 de 2006.

³⁶ Comisión de Seguimiento y Monitoreo a la Ley 1448 de 2011, Informe al Congreso de la República 2013.

203
y 153 del expediente, aun no existe solicitud por parte de la alcaldía del municipio, por lo que se requerirá en tal sentido.

No están llamadas a prosperar aquellas pretensiones que resulten inconducentes ya sea por no haberse probado los supuestos que las sustentan, o porque se han efectuado ya como actuaciones dentro del trámite procesal, o porque no corresponden con la declaración de pertenencia a En mérito de lo expuesto, el Juzgado Tercero de Descongestión Civil Del Circuito, Especializado en Restitución de Tierras, de Mocoa, Putumayo, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: DECLARAR, RECONOCER y PROTEGER al señor Ramiro Gonzalo Ordoñez Ordoñez identificado con C.C. No. 1.505.812 expedida en San Sebastián (C.) y a su cónyuge señora Carmen Velasco Martínez identificada con C.C. No. 27.352.813 expedida en Mocoa (P), en su derecho fundamental a la Restitución y/o Formalización, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia, en consecuencia la Agencia Nacional de Tierras, a través de su director general MIGUEL SAMPER STROUSS o a quien haga sus veces al momento de la comunicación de esta orden, dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación de esta providencia, ADJUDICARÁ en favor de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas, el predio Rural objeto de restitución ubicado en la vereda La Cofania, municipio Villagarzón, Departamento del Putumayo.

SEGUNDO: ORDENAR al Fondo de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas, realice la RESTITUCIÓN POR EQUIVALENCIA, la cual deberá llevarse a cabo en un lapso no superior a tres (3) meses contados a partir de la notificación de esta providencia, teniendo en cuenta el correspondiente avalúo comercial realizado por el IGAC, el cual será requerido con la notificación de la presente providencia para que se remita copia a la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas, previo análisis y concertación con los beneficiarios de la restitución aquí declarada, les TITULE Y ENTREGUE, un predio ubicado en el actual domicilio del solicitante en similares o mejores características al predio identificado e individualizado en el numeral 1.1 de esta providencia, conforme a lo establecido en la Ley 1448 de 2011 y Decreto 4829 de la misma anualidad, de lo cual deberá rendir el informe respectivo a esta judicatura.

Para dar cumplimiento a lo anterior, dicho Fondo deberá aplicar la opción legal más favorable para el solicitante y su grupo familiar, respetando el orden establecido en la citada norma, y teniendo en cuenta que en la actualidad ese grupo familiar se encuentra viviendo en la ciudad de Popayán, departamento del Cauca.

Advertir al Fondo de la UAEGRTD, Nivel Central, que el bien inmueble objeto de compensación que les sea entregado a los señores Ramiro Gonzalo Ordoñez Ordoñez identificado con C.C. No. 1.505.812 expedida en San Sebastián (C.) y Carmen Velasco Martínez identificada con C.C. No. 27.352.813 expedida en Mocoa (P), deberá encontrarse libre de cualquier clase de gravamen, a excepción la medida de protección estipulada en el artículo 101 de la Ley de víctimas.

TERCERO: ORDENAR a la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas que en asocio con la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas coordine y lleve a cabo la entrega material del predio compensado, la cual se hará de manera simbólica, entregándole a los solicitantes copia del presente fallo explicando su



20A

sentido y alcance, dejando la respectiva constancia, en el lugar donde actualmente se encuentra su residencia, ello dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación de la presente providencia.

CUARTO: ORDENAR a la señora Registradora de Instrumentos Públicos de Mocoa (P.), registrar a nombre del Fondo de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas, el predio Rural objeto de restitución ubicado en la vereda La Cofania, municipio Villagarzon, Departamento del Putumayo, el que se individualiza de la siguiente manera:

Matricula Inmobiliaria	Código Catastral	Área Solicitada	Área a Restituir	
440-5949	86-885-00-02-0023-0013-000	696 mts ²	524 mts ²	
COORDENADAS DEL PREDIO				
PUNTO	LATITUD	LONGITUD	NORTE	ESTE
12130	0° 56' 7,368" N	76° 41' 28,098" W	595305,013905	708988,923202
12131	0° 56' 7,298" N	76° 41' 27,352" W	595302,820396	709012,037503
12133	0° 56' 8,113" N	76° 41' 28,013" W	595327,915997	708991,587198
12132	0° 56' 8,043" N	76° 41' 27,293" W	595325,744365	709013,857385
LINDEROS Y COLINDANCIAS				
NORTE	Partiendo desde el punto 12133 en línea recta en dirección oriente, hasta llegar al punto 12132 en una distancia de 22,37 mts con predios del señor Jorge Ortiz.			
ORIENTE	Partiendo desde el punto 12132 en línea recta en dirección sur, en una distancia de 22,99 mts, hasta llegar al punto 12131, con predios del señor Duvan Morales.			
SUR	Partiendo desde el punto 12131 en línea recta en dirección occidente, en una distancia de 23,21 mts., hasta llegar al punto 12130 con predios de Ramiro Gonzalo Ordoñez.			
OCCIDENTE	Partiendo desde el punto 12130 en línea recta en dirección Norte, en una distancia de 23,05 mts, cerrando hasta el punto 12133, con predios de Vía Pública.			

Predio que se desprende de la Cédula Catastral No. 86-885-00-02-0023-0013-000 que figura a nombre de la señora Ismaelina Martínez Ortiz, razón por la cual se procederá a ordenar **segregar** el bien respecto a la cedula catastral, y la apertura de matrícula inmobiliaria del terreno aquí restituido, pues el que existe se realizó sobre mejoras y por lo tanto diferente al que figura en dicha información catastral.

QUINTO: ORDENAR a la señora Registradora de Instrumentos Públicos de Mocoa (P.), lo siguiente:

- La inscripción de esta Sentencia en el Folio de Matrícula Inmobiliaria No. 440-5949.
- Igualmente, se ordena el levantamiento de las medidas cautelares de inscripción de la demanda y de la orden de sustracción provisional del comercio del bien perteneciente al Folio de Matrícula Inmobiliaria No. 440-5949, proferida al momento de dar inicio a este trámite judicial.
- Dichas órdenes deberán hacerse efectivas dentro de los términos dados por la Superintendencia de Notariado y Registro, pero, los mismos sólo iniciaran a contar una vez allegada por la Agencia Nacional de Tierras la respectiva resolución de adjudicación.
- Además, esa misma funcionaria deberá hacer llegar a este Despacho y al IGAC el Certificado de Libertad y Tradición del Folio de Matrícula Inmobiliaria No. 440-5949, en el término de cinco (05) días contados a partir de las referidas inscripciones.
- Disponer como medida de protección, la restricción establecida en el artículo 101 de la Ley 1448 de 2011, consistente en la prohibición para enajenar el bien inmueble restituido durante el término de dos (2) años, siguientes a la expedición de esta sentencia, sin menoscabo de las prohibiciones de que trata la Ley 160 de 1994. Por Secretaría líbrese comunicación a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Puerto Asís, Putumayo, para que la inscriba en el folio de matrícula inmobiliaria respectivo.

SEXTO: ORDENAR al Instituto Geográfico Agustín Codazzi, para que dentro del término perentorio de un (1) mes, contado a partir del recibo de la calificación de la sentencia en el respectivo Folio de Matrícula Inmobiliaria, proceda a la actualización de sus registros cartográficos y alfanuméricos, atendiendo los criterios de individualización del predio reconocido en este fallo, debiendo **DESENGLOBAR** del predio de Cédula Catastral No. 86-885-02-0023-0012-0013-000, el bien que le ha sido reconocido a los reclamantes y del cual se ordena restituir a su favor quinientos veinticuatro (524 m²), debiendo rendir informe a este Despacho una vez se cumpla dicha tarea.

SEPTIMO: ORDENAR a la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV) la INSCRIPCIÓN de los señores Ramiro Gonzalo Ordoñez Ordoñez identificado con C.C. No. 1.505.812, Carmen Velazco Martínez identificada con la cedula de ciudadanía No. 27.352.813, junto a su hija Nancy Aleida Ordoñez Velasco identificada con C.C. No. 34.658.939 en el registro Único de Víctimas -RUV- para que accedan a las medidas de asistencia y reparación, como medida de reparación integral, según lo establecido en la Ley 1448 de 2011, y si no lo ha hecho, que los incluya en el Registro Único de Víctimas RUV.

OCTAVO: ORDENAR a la Unidad Administrativa Especial para la Atención Integral y Reparación a las Víctimas, a CORPOAMAZONIA, al INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR y a las entidades que conforman el SISTEMA NACIONAL DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN A LAS VÍCTIMAS, del orden nacional y territorial, para que realicen y ejecuten los planes de retorno y reubicación de los desplazados del municipio de Villagarzón, Putumayo, siguiendo los parámetros establecidos en la ley 1448 de 2011 y el Decreto 4800 de 2011, y los tiempos y responsabilidades dadas en la parte motiva de esta providencia, bajo la coordinación de la Unidad de Víctimas.

La UARIV también tendrá que adelantar el proceso de *Verificación de Carencias*, al que se refiere el Decreto 1084 de 2015, a partir del Título 6 en su capítulo 5, a fin de determinar en qué etapa deberá ser atendida la restituida y su grupo familiar, estableciendo los criterios y procedimientos para la entrega de la atención humanitaria de emergencia o transición a las víctimas de desplazamiento forzado con base en la evaluación de los componentes de la subsistencia mínima o la superación de la situación de vulnerabilidad del hogar, para luego dar paso a la correspondiente indemnización por vía administrativa. No sobra advertir que este grupo familiar, y toda la población que ha sido beneficiada con los pronunciamientos de este despacho, deberán ser atendidos de manera prioritaria con respecto a la aplicación del decreto en mención, tanto en lo que tiene que ver con la entrega de las ayudas humanitarias así como con el pago de las indemnizaciones por vía administrativa al ser víctimas del delito de desplazamiento forzado o de cualquier otro hecho delictivo generado por nuestro conflicto armado interno.

De igual manera, frente al actual Plan de Retorno para el municipio de Villagarzón (P), el Despacho se atiene a lo dispuesto en la audiencia de seguimiento post fallo, llevada a cabo el 25 de mayo de 2016 por el Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Mocoa (P), dentro del proceso radicado bajo el No. 2012-00098, el cual se entiende incorporado a esta sentencia, y atendiendo principalmente las siguientes ordenes en particular:

- El Departamento para la Prosperidad Social (DPS), según su oferta institucional, deberá poner en marcha la estrategia que busca implementar medidas de asistencia y acompañamiento a la población víctima del conflicto armado interno, y más concretamente, del delito de desplazamiento forzado, para que éstas puedan lograr su auto sostenimiento en pro de una estabilización socio-económica al interior de cada hogar.
- Igualmente, esta entidad, en asocio con el Ministerio de Cultura, deberá ejecutar proyectos de inversión social en infraestructura física al servicio de la comunidad (Centros de recreación, deporte y cultura), en el lugar donde se encuentra ubicado el predio inmerso en este proceso.

- En cada una de sus competencias, el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (DPS), el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), el Ministerio del Trabajo y la Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV), tendrán que poner en marcha todos los programas de generación de empleo y su correspondiente capacitación, ello en favor de todo el núcleo familiar de la solicitante, según lo dispone el título IV, capítulo I artículo 67 y 68 del Decreto 4800 de 2011.
- De igual manera se les deberá garantizar el acceso a la educación preescolar, básica, media, técnica y universitaria, concediendo incentivos y créditos de estudio para que puedan inscribirse a carreras técnicas, tecnológicas o universitarias relacionadas especialmente con el agro o a conveniencia del beneficiario, estando también involucradas para este fin, otras entidades tales como, el Ministerio de Educación, el ICETEX, y las Secretarías de Educación departamental y municipal.
- La UAEGRTD, deberá incluir por una sola vez a la beneficiaria y su núcleo familiar al momento del desplazamiento, en el Programa de Proyectos Productivos a cargo de la dependencia que internamente maneja ese tema, esto luego de verificar que se realizó la entrega o el goce material del predio objeto de restitución, y además viendo la viabilidad del proyecto, y de acuerdo a lo establecido en la Guía Operativa que maneja ese programa.
- El Ministerio de Salud y Protección Social, las Secretarías de Salud del departamento y del municipio de Villagarzón, deberán garantizar de manera integral y prioritaria, a la solicitante y su núcleo familiar, la cobertura en lo que respecta a la asistencia médica, en los términos del artículo 52 de la Ley 1448 del 2011 y los artículos 91 y subsiguientes del Decreto 4800 de 2011.
- Además se implemente en este departamento, en coordinación de la UARIV, el programa de atención psicosocial y salud integral para las víctimas del conflicto armado (PAPSIVI) con el fin de mitigar la afectación emocional de esta población.
- Al Departamento del Putumayo y el municipio de Villagarzón, les corresponde gestionar a nivel central los recursos necesarios para la recuperación y mantenimiento de las vías de acceso al lugar en el que se encuentra ubicado el predio aquí relacionado en caso de ser necesario, y responsabilizarse también por la buena prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado e interconexión eléctrica en la zona.
- El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) tendrá que intervenir en la zona donde se encuentra ubicado el inmueble objeto de este proceso, realizando el acompañamiento psicosocial a la familia que aquí ha sido beneficiada, determinando las diferentes necesidades de los menores de edad si los hubiere (niños, niñas y adolescentes) y que pueden aplicar en su favor según su oferta institucional, mediante los respectivos programas y proyectos, garantizando la atención integral a esta población.
- El Banco Agrario de Colombia, dentro de los planes o programas de crédito en favor de la población desplazada, tendrá que ofrecer a la persona interesada en este asunto teniendo en cuenta que se encuentra incluida dentro del Registro Único de Tierras Despojadas, si a ello hubiere lugar, la información completa en cuanto a cobertura y trámite para su consecución y desembolso, siempre que el mismo esté dirigido a una inversión agraria como proyecto productivo, y a iniciativa propia, si a ello hubiere lugar.
- Además, exhortar a esta misma entidad bancaria, Zonal Putumayo, gestione el pago por el beneficiario en condiciones favorables de la deuda pendiente y condonación de intereses



corrientes y/o moratorios, en aplicación del acuerdo No. 009 del 2013, en el caso concreto en que los solicitantes hayan adquirido deudas crediticias.

- El Banco Agrario de Colombia, los Ministerios de Vivienda, Ciudad y Territorio, y de Agricultura y Desarrollo Rural, en asocio o de manera individual, deberán atender prioritariamente a la persona solicitante y su grupo familiar, dentro de los programas para adquirir subsidios de mejoramiento, construcción o compra de vivienda nueva o usada, dentro del predio el cuál es objeto de compensación, y según su naturaleza, esto es, si es rural o urbano.
- Para lograr la materialización de este literal, la Unidad de Restitución de Tierras tendrá que remitir al Banco Agrario de Colombia, mediante el Acto Administrativo correspondiente, y de forma periódica, un listado de las personas que han sido beneficiadas con la Restitución de Predios y que tienen la necesidad de ser priorizadas en el tema de vivienda.
- El municipio de Villagarzón, representado por su señor Alcalde, y en coordinación con el Concejo de esa localidad, deberá dar aplicación al Acuerdo emitido por esa corporación, mediante el cual se establece la condonación y exoneración del impuesto predial, valorización, tasas y demás contribuciones a favor de los señores Ramiro Gonzalo Ordoñez Ordoñez y Carmen Velasco Martínez, reconocidos como propietarios en la presente acción pública, y sobre el predio formalizado a su nombre durante los dos años siguientes a la notificación del presente fallo.
- El Centro de Memoria Histórica deberá acatar de manera puntual los artículos 139, 147, 148 de la Ley 1448 de 2011, en la zona sobre la cual cobija esta decisión, y en lo que tiene que ver con las medidas de satisfacción y el recaudo de la información relativa a las violaciones de las que habla el artículo 3 ibídem.
- El Fondo de la Unidad de Tierras deberá aliviar las deudas que por concepto de servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado, aseo y energía eléctrica, tengan los interesados con las empresas prestadoras de los mismos y con las entidades financieras, en especial con el Banco Agrario, por créditos relacionados con el predio, dando aplicación al acuerdo No. 009 del 2013, en el caso concreto en que los solicitantes hayan adquirido deudas crediticias.
- El Comando de la Vigésima Séptima Brigada de Selva del Ejército Nacional, al igual que el Comando de Policía del Departamento del Putumayo, en ejercicio de su misión institucional y constitucional, tendrán que ejecutar los planes, estrategias, actividades y gestiones que sean necesarias para brindar la seguridad que se requiera a fin de garantizar la materialización de los dispuesto en esta sentencia, lo cual debe hacer parte del Plan de Retorno coordinado por la Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV).
- Todas las entidades involucradas en el cumplimiento de las ordenes aquí proferidas y expuestas en la Ley de Víctimas, relacionadas exclusivamente con la Restitución de Tierras en favor del señor Ramiro Gonzalo Ordoñez Ordoñez y su núcleo familiar al momento de la victimización, deberán rendir ante este Despacho un informe pormenorizado cada tres (3) meses, de todas las actividades, gestiones y actuaciones tendientes a su acatamiento; ello a fin de poder mantener control y seguimiento, en lo que a post fallo se refiere y hasta tanto desaparezcan las causas que amenacen los derechos de la parte solicitante, según lo dispone el parágrafo primero del artículo 91 de dicha ley.

NOVENO: ACLARAR, que todas las entidades mencionadas en el numeral anterior, las cuales hacen parte del SNARIV, aparte del cumplimiento a las órdenes puntuales aquí impartidas, deberán asumir sus obligaciones adicionales, respecto de los diferentes convenios o acuerdos

208

interinstitucionales, relacionados con el tema de la atención y reparación integral a las víctimas de las violaciones a las que se refiere el artículo 3 de la Ley 1448 de 2011, y particularmente a las que fueron beneficiadas con el presente pronunciamiento, ello en consonancia con el art. 26 ibídem.

DECIMO: NEGAR las demás pretensiones en atención a lo expuesto en la parte motiva del presente fallo.

DÉCIMO PRIMERO: EXHORTAR al señor Ramiro Gonzalo Ordoñez y posteriormente a la URT de conformidad con la compensación ordenada, a acatar y dar cumplimiento de la Ley 1228 de 2008 en lo referente a la faja de retiro obligatoria o área de reserva o de exclusión de que trata dicha ley.

DÉCIMO SEGUNDO: ORDENAR al Municipio del Villagarzon (P), para que proceda a dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 1228 de 2008 y el artículo 10 del Decreto 2976 de 2010, adelantando las acciones pertinentes en aras de proteger y conservar el espacio público representado en la faja de retiro obligatorio o área de reserva o de exclusión del predio comprometido en el proceso por colindar con la vía pública, llevando a cabo los procedimientos administrativos y/o judiciales que se requieran para efectos de evitar que particulares adelanten construcciones nuevas en dicha zona.

DÉCIMO TERCERO: NOTIFICAR este fallo al Representante legal del municipio de Villagarzon Putumayo, a la Procuraduría General de la Nación delegada para Restitución de Tierras y al representante judicial del solicitante, de conformidad con el artículo 93 de la ley 1448 de 2011, anexando copia de la misma.

Para dar cumplimiento a las órdenes aquí emanadas se remitirá copia virtual de esta providencia a las Direcciones Generales de las Unidades de Víctimas y de Tierras Despojadas, al Gobernador del Departamento del Putumayo, a CORPOAMAZONIA y a las entidades que pertenecen al Sistema Nacional de Atención y Reparación a las Víctimas, a la Contraloría General de la República y a la Defensoría del Pueblo. Por secretaría, líbrense los oficios, las comisiones y las comunicaciones pertinentes. Se advierte que al no tener recursos la presente providencia, por ser este un proceso de única instancia, queda debidamente ejecutoriada al momento de ser proferida.

DECIMO CUARTO: SIN LUGAR a condena en costas por no haberse causado.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE


ISBETH LILIANA RAMIREZ GOMEZ
Jueza



CONSTANCIA SECRETARIAL: Mocoa Putumayo, 26 de octubre de dos mil diecisiete (2017). Se deja en el sentido de que la sentencia No.0048 proferida el día 26-10-2017, por este Despacho dentro de la acción de Restitución de Tierras y/o formalización de títulos, radicada al número 860013121001-2015-00662-00, se encuentra debidamente ejecutoriada al tratarse de una providencia de única instancia.



VIVIANA ELIZABETH ROMERO INSUASTY
Secretaria